

Editorial

Desarrollo deformado: violencia, criminalidad y corrupción

HUMBERTO MÁRQUEZ COVARRUBIAS

El fenómeno de la violencia y la criminalidad en el México contemporáneo no puede entenderse como una disfunción externa al sistema económico, al contrario es la manifestación más depurada de un desarrollo capitalista deformado. En esa lógica, la economía mexicana transita hacia una fase de hipertrofia del capital criminal, donde la acumulación de riqueza depende cada vez más de una metástasis social de la violencia. Este desarrollo contrahecho se caracteriza por la simbiosis estructural entre los circuitos del capital legal e ilegal, que permiten al plusvalor obtenido por actividades ilícitas se reintegre orgánicamente al mercado formal.

El motor del sistema es el capital criminal, definido como dinero negro progresivo y a la vez como una fuerza expansiva que genera un plusvalor criminal a través de la producción y distribución de mercancías prohibidas como drogas y armas, pero también gracias a la extracción violenta de valor. Esta macrocriminalidad opera con una lógica empresarial de diversificación que abarca desde la extorsión sistemática y el despojo de tierras hasta la mercantilización de la vida humana en redes de trata y tráfico de migrantes.

Empíricamente, organismos como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) han señalado que el flujo financiero ilícito en México puede representar hasta el 3% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que evidencia que la economía nacional se encuentra profundamente anclada en la circulación de capitales de origen delictivo que terminan por aceitar al sistema bancario y al sector inmobiliario.

Contrario a la narrativa convencional del «Estado capturado» por el crimen, la realidad mexi-

cana sugiere la existencia de un Estado gestor de la criminalidad. En esta perspectiva, el Estado no es una víctima pasiva de la delincuencia, sino el ente que organiza, pacta y delimita los mercados ilícitos mediante el uso selectivo de la ley. El Estado ejerce su soberanía al decidir qué grupos criminales gozan de impunidad y cuáles son perseguidos apoyados en un populismo punitivo, estrategia política que utiliza el endurecimiento de penas para simular control, al mismo tiempo que mantiene intactas las estructuras financieras del crimen.

La narcopolítica es la expresión institucional de este vínculo, donde el plusvalor ilícito sirve como fuente nutricia para financiar campañas electorales y sobornar a la burocracia; ello facilita que personeros de grupos criminales ocupen puestos de elección popular o influyan en el nombramiento de mandos judiciales y policiales.

Esta gestión estatal se ha intensificado a causa de la militarización estratégica, que desplaza el control de nodos logísticos fundamentales —aeropuertos, puertos como Manzanillo y Lázaro Cárdenas, y vías ferroviarias— a manos castrenses. Fundados en la premisa de la seguridad nacional se ha creado un manto de opacidad que facilita la complicidad en el tráfico de mercancías ilícitas y la consolidación de un «militarismo de mercado». En ese escenario, las fuerzas armadas no sólo actúan como garantes del orden, funcionan también como actores económicos con intereses propios en la administración de infraestructuras críticas, lo que desdibuja la frontera entre la seguridad pública y la gestión de negocios, además de posibilitar que sectores del ejército participen en la

distribución interna y exportación de productos del mercado negro.

La corrupción, lejos de ser un problema secundario o moral, funciona como un mecanismo esencial de acumulación originaria y competitividad en el capitalismo contemporáneo. A través de ella, capitales poco competitivos o emergentes logran condiciones preferenciales mediante la asignación discrecional de obra pública y la ejecución de megaproyectos. Esta dinámica genera un circuito de fraude donde los sobrepresos y la especulación con la tierra inflan la deuda pública, y trasladan el costo del enriquecimiento ilícito de la élite política y empresarial al conjunto de la sociedad. El circuito de la corrupción supone una espiral donde el Estado da paso al tráfico de bienes, a la evasión fiscal masiva y a maniobras especulativas en el sector financiero. Lo anterior exhibe que no existe una diferencia sustancial en esa praxis entre los funcionarios de orientación nacional-populista y los tecnócratas neoliberales.

Finalmente, la crisis humanitaria que experimenta México es la consecuencia inevitable de este modelo de desarrollo. Las altas tasas de homicidios, feminicidios y juvenicidios no son eventos aislados, son tácticas de un narcoterrorismo paramilitar diseñado para infundir miedo y garantizar la sumisión de la población en zonas de influencia criminal. La violencia se utiliza para disciplinar la fuerza de trabajo, asegurar el control territorial y garantizar la reproducción de los negocios ilícitos frente a cualquier resistencia social. Este entorno es validado por una narcocultura que dota de sentido simbólico al poder criminal, presentándolo como la única vía de éxito en un sistema que despoja a las mayorías de sus medios de subsistencia y consolida así un orden donde la acumulación de capital exige, necesariamente, la degradación de la vida humana.

